

DEMANDA DE ACCIÓN DE  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
INSTITUCIONALIDAD.

17 SEP 28 2020 PROMOVENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO  
INSTITUCIONAL.

OFICINA DE  
CERTIFICACIÓN JUDICIAL  
Y CORRESPONDENCIA

ASUNTO: ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.

HH. MINISTRAS Y MINISTROS INTEGRANTES DE  
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.  
PRESENTES.

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, en mi carácter de titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, personalidad que acredito en términos de la certificación expedida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección del Secretariado del referido instituto; de veinticuatro de julio de 2020, mediante la cual, se hace constar la integración de la Dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, así como la certificación expedida por la referida Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección del Secretariado del instituto en cuestión; de veinticuatro de julio de 2020, por la que se acredita que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra registrado como Partido Político Nacional y, el instrumento notarial número 32,848 de 19 de septiembre de 2019, pasado ante la fe del licenciado Sergio Rea Field, Titular de la Notaría 241, actuando como asociado y a cargo de la Notaría 187, ambas de la Ciudad de México, (Anexo Uno); con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, inciso f) del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución General), así como en lo previsto por los artículos 59, 60, 61 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria), en tiempo y forma, dentro del plazo previsto en los numerales 105, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley Reglamentaria en la materia, comparezco respetuosamente ante Ustedes para promover **DEMANDA DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD** en contra del Decreto 300 expedido

por la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 12; los párrafos primero y tercero fracciones I, II, III y VI del artículo 14; y se derogan el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en virtud de ser contrario a diversas disposiciones de la Ley Fundamental de la República.

Me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos las oficinas de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, ubicadas en el Segundo Piso del edificio "Adolfo López Mateos" de la sede nacional de esta organización política, localizada en Avenida Insurgentes Norte número 59, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06350, y señalándose como delegados con las facultades a que se refiere la parte final del segundo párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria a las y los CC. [REDACTED]

[REDACTED] y autorizándose igualmente, en términos de lo dispuesto por el último párrafo, del artículo 4 de la propia Ley Reglamentaria a las y los CC. [REDACTED]

[REDACTED] para oír notificaciones, imponerse de autos -incluidos por medios electrónicos o digitales-, recibir copias de traslado, documentos, valores y todo aquello que derivado del presente asunto deba ser entregado al Partido Revolucionario Institucional en carácter de promovente.

Con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales referidas, por medio del presente escrito ocurro en tiempo y forma ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación a solicitar la **DECLARACIÓN DE INVALIDEZ** de la reforma que llevó a cabo el órgano revisor de la Constitución de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco al segundo párrafo del artículo 12; los párrafos primero y tercero fracciones I, II, III y VI del artículo 14; y se derogan el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco el 26 de agosto de 2021, que en forma contraria a la Constitución General, modificó la composición del Congreso del Estado de 35 diputados electos cada tres años, 21 por el principio de mayoría relativa y 14 por el principio de representación proporcional a 29 diputados electos cada tres años 21 por el principio de mayoría relativa y 8 por el principio de representación proporcional.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los diversos, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".

En ese tenor se procede a dar cumplimiento a los artículos 22 y 61 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, páralo cual manifestamos lo siguiente:

## **I. NOMBRE Y FIRMA DEL PROMOVENTE.**

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, como ha quedado precisado en el proemio del presente escrito inicial de demanda, obrando la firma del suscrito al calce de la demanda.

## **II. ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO QUE EMITIERON Y PROMULGARON LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.**

**1) Autoridad Legislativa Emisora: EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TABASCO**, depositado en la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, cuyo domicilio es la avenida Independencia Núm. 303 Col. Centro, C.P. 8600, Villahermosa, Tabasco. México.

Emisor del Decreto número 300 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Tabasco. Así como la correspondiente publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial número extraordinario 220, folio 5108, de fecha 26 de agosto de 2021, como Órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

**2) Autoridades Promulgadoras:** del Decreto número 300 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Tabasco. Así como la correspondiente publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial número extraordinario 220, Tomo folio 5108, de fecha 26 de agosto de 2021, como Órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

**a) EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO**, depositado en el otrora ciudadano GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, con domicilio en calle Independencia

No. 2, Col. Centro, Palacio de Gobierno, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.

b) EL CIUDADANO SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, con domicilio en Avenida Gregorio Méndez, esquina Venustiano Carranza, S/N, Col. Centro, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México.

c) EL CIUDADANO DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, Órgano encargado de dar publicidad a la Ley impugnada, con domicilio en la calle de Independencia No. 2, Col. Centro, Palacio de Gobierno, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México.

Estas autoridades se señalan, con independencia de que, ante el caso de cualquier omisión en cuanto a las autoridades promulgadoras, se esté a lo establecido por esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial que al efecto transcribimos, con rubro y texto del tenor siguiente:

**"LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDAD RESPONSABLE. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALA AL CONGRESO QUE LE EXPIDIÓ, PERO NO AL EJECUTIVO QUE LA PROMULGO.** Aunque el ejecutivo interviene en el proceso formativo de la ley, su actividad en este aspecto se haya subordinada a la voluntad del poder legislativo que la expide, y esta preponderancia hace que se considere a la ley como un acto legislativo tanto desde el punto de vista formal como material. En consecuencia, si en la demanda se señala como acto reclamado la expedición de la ley, y se llama a juicio como responsable al Congreso no hay impedimento para examinar la constitucionalidad del ordenamiento combatido, aunque no se haya llamada al ejecutivo que la promulgó si además, no se hacen valer conceptos de violación en contra de dicha promulgación por vicios propios, pues habiéndose llamado a juicio a la responsable de los conceptos de violación, habrán de trascender a los demás actos de formación de la ley.- Apéndice: 1917 - 1995.- Número de Registro: 196.- instancia: Pleno.- Época: séptima sala; tomo: 1- constitucional (SCJN).- Tesis: 196; Página 192..."

### **III. LA NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE PUBLICÓ.**

Decreto número 300 expedido por la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial Número 220 de 26 de agosto de 2021, por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 12; los párrafos primero y tercero fracciones I, II, III y VI del artículo 14; y se derogan el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

### **IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS.**

La norma impugnada y cuya invalidez se demanda vulnera lo dispuesto en los artículos 1º; 14; 16; 41; 115, fracción II y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin demérito de las demás disposiciones que esa H. Suprema Corte desprenda de los conceptos de invalidez que se desarrollarán en este escrito.

### **V. COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente demanda de acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria en la materia, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de las normas generales precisadas en el apartado III del presente curso.

### **VI. OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN.**

Acorde al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la norma impugnada.

Para el caso, la norma cuya declaración de invalidez que se solicita, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de agosto de 2021, por tanto, al promoverse el día de hoy ante esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción es oportuna.

## VII. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

El artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente dispone que el Partido Revolucionario Institucional como partido político con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de su dirigencia nacional, tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad de normas generales que vulneren las previsiones de la Constitución o de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado Mexicano es parte, respecto de las legislaciones electorales federales y de las entidades federativas, en los siguientes términos:

*“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:*

*...*

*II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución*

*...*

*f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro.*

*...*

Conforme al citado precepto constitucional, acudo a este Alto Tribunal en mi carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en los términos del primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la

Constitución Federal, aplicable en acciones de inconstitucionalidad, en concordancia con lo dispuesto en el precepto 59 del citado ordenamiento.

La representación que ostento y sus atribuciones, se encuentran previstas en lo dispuesto en los artículos 89, fracción XVI, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional y 20, fracción XVI, del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, preceptos que a continuación de transcriben en su parte conducente:

#### **De los Estatutos**

*“Artículo 89. La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las facultades siguientes:*

*...*

*XVI. Ocurrir en representación del Partido para promover la acción de inconstitucionalidad referida en el artículo 105, fracción II, inciso f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se trate de plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución.*

*...*

#### **Del Reglamento**

*“Artículo 20. El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribuciones siguientes:*

*...*

*XVI. Ocurrir en representación del Partido para promover la acción de inconstitucionalidad referida en el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se trate de plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución;*

*...”*

#### **VIII. RESERVA DE DERECHOS Y FINALIDAD.**

Se formula la reserva de derechos más amplia que en derecho proceda, a fin de estar en posibilidad de ampliar la presente demanda de acción de inconstitucionalidad previo a que fenezca el plazo de treinta días naturales para ejercitar esta acción. Lo anterior, en términos del artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria en términos del artículo 1° de la Ley Reglamentaria.

Aunado a ello, previamente se hace ver a este Alto Tribunal que la presente demanda tiene como única finalidad que el máximo interprete constitucional de nuestro país se pronuncie sobre la constitucionalidad de una norma que ha dado lugar a diversas interpretaciones de principios fundamentales como los de legalidad y certeza.

Por tanto, en única instancia a la luz del bloque constitucional, se somete a consideración de esta Suprema Corte la presente demanda, para que, con los elementos que se aportan, sea este Tribunal Constitucional el que decida la validez o invalidez en la norma jurídica.

## **IX. ANTECEDENTES DE LA NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.**

Para mayor claridad de la exposición que se formulará se considera pertinente exponer los antecedentes del Decreto impugnado:

1. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, puede ser adicionada o reformada; pero para que estas adiciones o reformas lleguen a formar parte de la misma se requiere que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

2. El 25 de agosto del año 2021, mediante Sesión Pública Extraordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aprobó el Decreto Número 300 que Reforma y Deroga Diversas Disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Tabasco.

3. Con fecha 26 de agosto de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el Decreto número 300 que reforma y deroga diversas



disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Tabasco, reforma que en lo que interesa se encuentra redactada en los siguientes términos:

**ARTÍCULO ÚNICO.** · Se reforman el segundo párrafo del artículo 12; los párrafos primero y tercero fracciones 1, 11, 111 y VI del artículo 14; y se derogan el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue:

**Artículo 12.** · ... El Congreso se compone por 29 diputados electos cada tres años, 21 por el principio de mayoría relativa y 8 por el principio de representación proporcional; durante su gestión constituyen una Legislatura. Las elecciones serán directas y se apegarán a lo que disponen esta Constitución y las leyes aplicables.

...

...

**Artículo 14.-** La elección de diputados, propietarios y suplentes, según el principio de representación proporcional, será por lista de candidatos en una circunscripción plurinominal que comprende todo el territorio del Estado.

**Se deroga**

...

**I.** Para obtener el registro de su lista de candidatos, el Partido Político que lo solicite, deberá acreditar que participa con candidatos a Diputados por mayoría relativa en, por lo menos, las dos terceras partes de los Distritos Electorales uninominales; 1

**II.** Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida para la lista de la circunscripción plurinominal, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, mediante la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a) al b) ...

*III. Al partido político que cumpla con las dos fracciones anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación estatal emitida, el número de diputados de su lista de candidatos. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente;*

**IV. a la V. ...**

*VI. En los términos de lo establecido en las fracciones 11, 111, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello, en proporción directa con la respectiva votación estatal emitida de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.*

**Artículo 15.- ...**

**I. a la V. ...**

**Se deroga**

4. Como puede apreciarse el citado Decreto de reforma Constitucional local en materia político electoral, publicado en el Periódico Oficial el 26 de agosto de 2021, un artículo Tercero transitorio en el que ordenó que, dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán las reformas necesarias a la legislación que corresponda, a fin de armonizarlas con las disposiciones establecidas en el presente Decreto.

5. Como se plantea y pone de manifiesto en esta demanda, el referido Decreto, contiene diversas violaciones tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Deberes Civiles y Políticos, así como a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales son contrarias a los citados

ordenamientos, por lo que promovemos esta acción a efectos de que se declare la invalidez del mismo.

Es por todos estos antecedentes que, en concepto de esta parte, la emisión del decreto de reformas, adiciones y que deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, adolece de los siguientes:

## **X. CONCEPTOS DE INVALIDEZ.**

### **PRIMERO. Violación al proceso legislativo.**

El Decreto número 300 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Tabasco. Así como la correspondiente publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial número extraordinario 220, folio 5108, de fecha 26 de agosto de 2021, como Órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, contraviene los citados artículos.

Lo anterior, en virtud de que, al expedirse el citado Decreto, se cometieron violaciones sustanciales al procedimiento legislativo que dan origen a la invalidez de dicho decreto, como enseguida se pone de manifiesto:

En sesión pública Extraordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Correspondiente al día 25 de agosto del año 2021, en términos de los artículos 29, 39, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 40, 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinó entre otras cosas:

(...)

*V. Cómputo de votos de los ayuntamientos y concejos municipales, y declaratoria, en su caso, de haber sido aprobadas las reformas al segundo párrafo, del Artículo 12; a los párrafos primero y tercero, fracciones I, II, III y VI, del Artículo 14; y la derogación, del párrafo segundo, del Artículo 14; y del párrafo*

*segundo, del Artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco:*

*(...)*

Convocatoria a período extraordinario contenida en una resolución del Congreso que tiene el carácter de decreto y que no se publicó en el Periódico Oficial del Estado, como lo establecen los artículos 28 de la Constitución local y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; que establecen:

### ***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco***

*Artículo 28.- Toda resolución que al respecto expida el Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo, e iniciativa ante el Congreso de la Unión. Las dos primeras, cumplido el proceso legal, una vez firmadas por el Presidente y el Secretario se remitirán al titular del Poder Ejecutivo para su sanción y promulgación.*

*Asimismo, en los términos que se establezcan en la ley orgánica se podrán emitir acuerdos parlamentarios, puntos de acuerdo y acuerdos de Comisión.*

### ***Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco***

*Artículo 78.- El Ejecutivo no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando éste ejerza funciones de colegio electoral o de jurado, lo mismo cuando se declare la procedencia de juicio político o que ha lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos o haber sido aprobadas las adiciones o reformas a la Constitución General de la República y a la del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y a su Reglamento Interno, tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.*

En efecto concatenando ambas disposiciones, en esencia se desprende: que las resoluciones que emite el Congreso, fundamentalmente son leyes y decretos y que la comisión permanente debió convocar a período extraordinario de sesiones; asimismo se desprende, que la resolución que se

emite para convocar a un periodo extraordinario tiene el carácter de decreto. En consecuencia, era obligatorio que se publicara en el Periódico Oficial del Estado, que es el órgano de difusión oficial en el Estado; acorde a lo que establecen las disposiciones citadas en relación con el artículo 6 del Código Civil para el Estado de Tabasco y los artículos 2, 6, 11 del Reglamento para la Impresión, Publicación y Resguardo, del Periódico Oficial del Estado, publicado en dicho medio de difusión suplemento 6085 del 30 de diciembre del año 2000.

Sin embargo, ni el decreto, ni la convocatoria respectiva emitida por la comisión permanente, convocando al periodo extraordinario de fecha 25 de agosto de 2021, se publicaron en el referido medio de difusión. Incluso de la lectura de dicha convocatoria no se desprende que la Comisión Permanente haya ordenado su publicación, por lo que con mayor razón resulta evidente que no se públicos; por lo tanto, de origen, el procedimiento legislativo por el que se convocó al referido periodo extraordinario de sesiones está viciado, porque no se cumplieron con los principios de legalidad y de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ni con las formalidades esenciales del procedimiento legislativo.

Por lo tanto, al no haberse publicado en el Periódico Oficial del Estado, ni el decreto, ni la convocatoria señalada, es evidente que el procedimiento legislativo seguido para aprobar el decreto 300 arriba citado, es contrario a lo que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y por lo mismo debe declararse su invalidez.

Que adicionalmente a la violación expuesta en los apartados que anteceden, es de señalarse que se cometió otra violación, porque el periodo extraordinario de sesiones mencionado, citado por la comisión permanente para el día 25 de agosto de 2021, no acredita fehacientemente que se haya turnado a los 17 que conforman el Estado Libre y Soberano de Tabasco. De igual manera no acreditan como fueron los Cómputos de votos de los ayuntamientos y concejos municipales, y declaratoria, en su caso, de haber sido aprobadas las reformas al segundo párrafo, del Artículo 12; a los párrafos primero y tercero, fracciones I, II, III y VI, del Artículo 14; y la derogación, del párrafo segundo, del Artículo 14; y del párrafo segundo, del Artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con dicho actuar se coarta los principios democráticos de deliberación parlamentaria, certeza, legalidad y el derecho a la información de los de los ayuntamientos y concejos municipales, que son considerados

derechos fundamentales; máxime que por la importancia de las reformas y adiciones contenidas en el dictamen respectivo era necesario que los ayuntamientos lo conocieran, por lo que al no haberse hecho así es claro que se violan los artículos 1, 14, 16, 39, 40 y 41 de la Constitución General de la República.

Otra violación más al procedimiento, consiste en que al aprobarse el decreto 300, que se señala como inconstitucional, no se observó que los artículos de un dictamen en lo particular, se deben discutir uno por uno, obviamente del menor al mayor, conforme lo mandata el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al establecer: *"Artículo 90.- Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán primero en lo general y después en lo particular cada uno de sus artículos; cuando conste de un solo artículo será discutido una sola vez"*.

En tal virtud, sumado a que el dictamen no fue circulado en tiempo y forma, es evidente que los ayuntamientos y concejos municipales no contaron con los elementos para debatir y emitir un voto razonado respecto a las reformas y adiciones a esos ordenamientos, por lo que tal proceder es violatorio a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como del principio de deliberación parlamentaria conceptualizado en la jurisprudencia P./J. 11/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y propio de la democracia representativa, elegida como modelo de Estado, de acuerdo con los artículos 39, 40 y 41 de la citada ley suprema.

Incluso como una violación más cometida durante el proceso del que derivó el decreto cuya inconstitucionalidad se señala, es la relativa a la sanción y promulgación del Decreto 300, porque como esa Suprema Corte actuando como tribunal constitucional lo apreciará, la sesión de fecha 25 de agosto de 2021, se inició a las 12:11 horas y concluyó 13:07; sin embargo, el Decreto mencionado, aparece publicado el día 26 de agosto de 2021, resultando poco creíble que al día siguiente, se haya cumplido todo el procedimiento señalado en los artículos 28, primer párrafo y 35, de la Constitución Política del Estado, que disponen que el decreto respectivo, se debe enviar al Ejecutivo para su sanción y promulgación y solo si este no tuviere observaciones que hacer los promulgará; (considerándose, aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de los veinte días naturales siguientes a su recepción); vencido este

plazo, el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto.

Trámites que evidentemente, requieren de un procedimiento complejo y tardado porque el Congreso debe elaborar el decreto, remitirlo al titular del Poder Ejecutivo para que éste lo sancione, lo cual requirió que el Gobernador firmara la sanción respectiva, además del secretario de gobierno y del coordinador general de asuntos jurídicos, quienes también lo firman; posteriormente se tuvo que enviar al secretario de gobierno, quien a su vez vía la dirección de asuntos jurídicos, lo envió para su publicación al Director de Talleres Gráficos, donde se le dio el formato respectivo y se publicó, lo que es prácticamente imposible, realizar en tan pocas horas, como supuestamente ocurrió en el caso que nos ocupa; sobre todo porque debe tomarse en cuenta que el artículo 17 del Reglamento señalado dispone: "Los documentos que requieran ser publicados, deberán hacerse llegar a la Dirección de los Talleres Gráficos, a más tardar a las 12:00 horas, del día anterior al que se realizará la publicación", precepto que tampoco se cumplió, por lo que este proceder pone de manifiesto la forma tal desaseada con que se emitió y promulgó el referido decreto 300, que impugnamos por esta vía.

En apoyo a los razonamientos vertidos respecto a las diversas violaciones al procedimiento legislativo que se han señalado en este concepto de invalidez, son aplicables las jurisprudencias siguientes:

**"FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO.** Cuando en una acción de inconstitucionalidad se analicen los conceptos de invalidez relativos a violaciones a las formalidades del procedimiento legislativo, dicho estudio debe partir de la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, que es precisamente el acogido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 39, 40 y 41. A partir de ahí, debe vigilarse el cumplimiento de dos principios en el ejercicio de la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales: el de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando

ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto, y el de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales producidas en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.

**"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL.**

Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de



ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención.

**"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS.** El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 6/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 915, sostuvo que en acción de inconstitucionalidad en materia electoral debe privilegiarse el análisis de los conceptos de invalidez referidos al fondo de las normas generales impugnadas, y sólo en caso de que resulten infundados deben analizarse aquellos en los que se aduzcan violaciones en el desarrollo del procedimiento legislativo originó a la norma general impugnada. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el

tema conduce a apartarse de la jurisprudencia citada para establecer que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, cuando se hagan valer violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a la norma general impugnada, éstas deberán analizarse en primer término, ya que, de resultar fundadas, por ejemplo, al trastocar valores democráticos que deben privilegiarse en nuestro sistema constitucional, su efecto de invalidación será total, siendo, por tanto, innecesario ocuparse de los vicios de fondo de la ley impugnada que, a su vez, hagan valer los promoventes.

**"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTA INNECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS EN LA DEMANDA CUANDO SE ADVIERTE UN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PROVOCA LA NULIDAD TOTAL DEL ACTO LEGISLATIVO IMPUGNADO.** En términos de lo previsto en el artículo 71, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dictar sentencia en una acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe suplir los conceptos de invalidez planteados en la demanda y fundar su declaración de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, sea invocado o no en el escrito inicial. En congruencia con lo anterior, si del análisis del marco constitucional que rige la materia en la que incide el acto legislativo impugnado se advierte un vicio de inconstitucionalidad que implica la nulidad total de éste, la Suprema Corte debe emitir la declaración de invalidez fundada en el precepto constitucional correspondiente, incluso ante la ausencia de un concepto de invalidez específico, puesto que ese efecto de invalidación hace innecesario pronunciarse sobre los conceptos de invalidez planteados en la demanda.

**"LEYES ELECTORALES. EL PLAZO EN QUE DEBEN PROMULGARSE Y PUBLICARSE, Y DURANTE EL CUAL NO PODRÁ HABER MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LAS MISMAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO JUSTIFICA LA URGENCIA EN SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE ELUDA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBA CUMPLIRSE.** El artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, prevé que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no se les podrán realizar modificaciones sustanciales; sin embargo, el citado plazo no constituye un motivo para calificar de urgente la dispensa de trámite de una iniciativa de reforma legal que rige aspectos fundamentales del proceso electoral, ya que lo que la mencionada disposición garantiza es la certeza en la regulación del proceso electoral que se realizará a nivel federal o local, mas no autoriza a los órganos legislativos a hacer uso de ella para justificar la urgencia de aprobar una norma general electoral, eludiendo el procedimiento legislativo correspondiente. En efecto, el citado artículo debe armonizarse con los demás principios o valores constitucionales, entre ellos, el de que la aprobación de una ley debe ser producto de la deliberación de todas las fuerzas representativas, asimismo el de certeza electoral que obliga al Poder Legislativo a actuar con la suficiente anticipación que permita el desarrollo del procedimiento legislativo ordinario. Por consiguiente, la pretensión del órgano legislativo de cumplir con el citado plazo constitucional para reformar una ley electoral, no justifica que las mayorías que lo componen eludan el procedimiento legislativo que debe seguirse para la aprobación de reformas sustanciales a las leyes electorales e imponerse, de esta forma, a las minorías.

**"DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.** La circunstancia de que una propuesta de dispensa de trámites legislativos se apruebe por mayoría o unanimidad de votos, no es suficiente para convalidar su falta de motivación, máxime cuando incide negativamente en los principios democráticos que deben sustentar el actuar del Poder Legislativo. Además, las votaciones ocurridas durante el desarrollo del procedimiento no pueden servir como sustento para desestimar los conceptos de invalidez en los que se aduce la violación a los principios democráticos en un proceso legislativo.

**"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LOS ARTÍCULOS 48, 49, 49 BIS, 79, 86, 112, 113, 135, 136, 137, 139 y 141 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTABLECEN REGLAS ESPECÍFICAS Y OBLIGATORIAS, PARA LA DELIBERACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS LEYES Y NORMAS GENERALES.** Del contenido de los artículos 48, 49, 49 Bis, 79, 86, 112, 113, 135, 136, 137, 139 y 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, se desprenden como reglas del proceso legislativo las siguientes: a) Los proyectos para ser discutidos tanto por las comisiones respectivas, como por el Pleno, deben presentarse, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión, a los diputados integrantes (48 y 49); b) En el caso de que se proponga voto particular que modifique el proyecto de ley, se procederá a la deliberación y aprobación o desaprobación, en los términos previstos en la norma (49 y 49 Bis); c) Las sesiones tendrán el carácter de ordinarias y extraordinarias, y las primeras tendrán lugar a partir de las once horas en los días previstos en la norma (79); d) La Legislatura por mayoría podrá constituirse en sesión permanente para el desahogo total de los asuntos iniciados (86); e) El dictamen a una iniciativa de ley se discutirá en lo

general y de ser aprobado, en la misma sesión se discutirá en lo particular separando los artículos que lo ameriten y se someterá a votación de la asamblea (112); f) La asamblea puede votar para su resolución el dictamen de ley originalmente presentado, o bien, por el voto particular de alguno de sus integrantes (113); g) Todos los asuntos sobre los que el Congreso deba resolver, se someterán a votación de la asamblea (135); h) Para la aprobación de los asuntos se establecen tres clases de votación: por cédula, nominal y económica. La votación nominal habrá de desahogarse en todos los casos sometidos a la asamblea cuando exista un empate en la votación económica o cuando el pleno decida que el asunto lo amerita; dicha votación consiste en que cada miembro de la Legislatura se ponga de pie y diga en voz alta su nombre y apellido, expresando el sentido de su voto (136, 137 y 139); y, finalmente, i) Todos los asuntos se resolverán por mayoría simple de votos de los presentes con las salvedades previstas en la norma (141). En ese sentido, la desatención a alguna de las citadas reglas del procedimiento legislativo, como lo es la relativa a los métodos de votación para determinar la mayoría de la reforma en caso de empate, transgrede los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo, así como el principio de deliberación parlamentaria conceptualizado en la jurisprudencia P./J. 11/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque dicha omisión impide cumplir uno de los elementos esenciales de la democracia en nuestro sistema de gobierno representativo y popular a que se refieren los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal, ya que la falta de la deliberación pública afecta la legalidad del procedimiento legislativo, pues es a través de ella como los ciudadanos, con el actuar de sus representantes, toman las decisiones colectivas en un debate abierto, que es propio de la democracia y cuya expresión culminatoria da la regla de acatamiento para la mayoría. De manera que la voluntad parlamentaria, al ser restringida por las omisiones en el desarrollo de la votación, se constituye en una violación a las formalidades del procedimiento legislativo que afecta los referidos principios

*y derechos constitucionales, sin los cuales no puede tener validez la aprobación de las normas.*

A mayor abundamiento es de precisarse que no se debe soslayar expuesto en diversas teorías, en el sentido de que las normas jurídicas tienen como finalidad regular la conducta del hombre en sociedad; pero desde luego para que estas puedan alcanzar sus fines, deben ser válidas y para que una norma tenga validez legal, debe ser producto de un acto considerado de igual forma válido, lo que evidentemente no se cumple en el caso que nos ocupa.

**SEGUNDO.** Se conculcan los principios de certeza, imparcialidad y legalidad de la función estatal electoral.

**Norma vulnerada:** artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso b) de la Constitución General.

**Artículo 116.** *El poder público...*

*Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:*

*IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:*

*b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean los principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.*

**Valor conculcado:** congruencia integral del orden jurídico del Estado Federal.

**Principio violado:** supremacía constitucional.

Para el desempeño de la función estatal electoral, nuestro sistema constitucional asumió una preceptiva basada en el imperio de determinados

principios, a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, auténticas, competidas y periódicas. En ese orden de ideas, tanto en el primer párrafo del Apartado A, de la Base V, del artículo del Apartado A, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución General, como en el inciso b), de la fracción IV, del artículo 116 Constitucional, se establecen como principios de la función estatal electoral los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y máxima publicidad y objetividad.

Se trata de una determinación del órgano revisor de la Constitución General para precisar los componentes que en toda ocasión deben caracterizar a las actuaciones de la autoridad -cualquiera que sea ésta<sup>1</sup>, de los partidos políticos, de los candidatos de toda naturaleza, de los militantes de los partidos e incluso de las y los ciudadanos.

Desde el punto de vista gramatical, el vocablo *certeza*, proviene de la voz cierto, significa "conocimiento seguro y cierto de algo o firme adhesión de la mente algo cognoscible, sin temor de errar"<sup>2</sup>. En materia electoral se ha significado por la posibilidad de conocer, desde el inicio mismo del proceso electoral, las normas y reglas fundamentales para llevar a cabo los procedimientos inherentes a la expresión de la voluntad ciudadana para determinar quién o quienes accederán al ejercicio del poder público.

Al efecto, resulta pertinente citar la siguiente tesis de jurisprudencia del Pleno de esa H. Suprema Corte:

**CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO.** El principio de certeza en materia electoral contenido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, con la seguridad de que previamente tanto los partidos políticos como las minorías parlamentarias, e incluso el Procurador General de la República, tuvieron la oportunidad de inconformarse con las modificaciones legislativas de último momento, las cuales podrían haber trastocado alguno de los derechos que

<sup>1</sup> EL órgano revisor de la Constitución de Baja California tiene el carácter de autoridad legislativa local en el ámbito de su competencia y al incidir en la materia electoral está obligada a respetar los principios de la función estatal electoral.

<sup>2</sup> Diccionario de la Real Academia Española.

por disposición constitucional asisten a los mencionados institutos políticos, a sus candidatos o a los mismos electores. Sin embargo, el mencionado principio tiene como excepciones: a) que las citadas modificaciones legislativas no sean de naturaleza trascendental para el proceso electoral, pues si su carácter es accesorio o de aplicación contingente, la falta de cumplimiento del requisito formal de su promulgación y publicación sin mediar el plazo de 90 días a que alude el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal no producirá su invalidez, pues aún en el supuesto de que rompieran con la regularidad constitucional por diversos motivos, su reparación bien podría ordenarse sin dañar alguno de los actos esenciales del proceso electoral, aunque éste ya hubiera comenzado; y b) si la modificación a las leyes electorales se hace indispensable por una declaración de invalidez que hubiese hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya haya iniciado el proceso electoral, pues en tal caso la creación de nuevas normas tiene como sustento posteriores circunstancias fácticas que demandan la generación de disposiciones jurídicas complementarias, o la reforma de las existentes, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los participantes, pues sería igualmente ilógico que por la exigencia de un requisito formal, el trabajo parlamentario quedara inmovilizado cuando los propios acontecimientos exigen su intervención, siempre que se atiendan y preserven los principios rectores de la materia electoral.

Acción de inconstitucionalidad 29/2005. Procurador General de la República. 8 de noviembre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 98/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal.

Conforme a su significado gramatical, el sustantivo imparcialidad significa "falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de personas o cosas, que permiten juzgar o proceder con rectitud"<sup>3</sup>. En términos específicos de la normatividad de carácter electoral, la imparcialidad constituye el compromiso de toda autoridad por mantenerse en una actitud de respeto y ajena a cualquier compromiso con quien o quienes tengan un interés particular en el proceso comicial y en sus resultados. La imparcialidad implica mantenerse al margen de cualquier inclinación o interés específico

---

<sup>3</sup> Real Academia Española.



vinculado con los partidos políticos, las candidaturas y las expresiones de simpatía o de rechazo relacionadas con cualquier postulación de carácter particular. El principio de imparcialidad, demanda una conducta ayuna de cualquier compromiso con quienes compiten en un proceso electoral de cualquier naturaleza.

El vocablo legalidad, vinculado al adjetivo legal, desde el punto de vista gramatical significa "calidad de legal" y "régimen político estatuido por la ley fundamental del Estado". En materia electoral significa la sujeción estricta de la actuación de toda autoridad que aborde esta materia o que cumpla sus disposiciones a las previsiones del orden jurídico aplicable. Este principio comprende tanto la actuación de las autoridades en la materia, con base estrictamente en las facultades que le han sido conferidas en los ordenamientos legales, como la sujeción de su actuación a la normatividad aplicable.

Al respecto, se estima pertinente hacer referencia a la siguiente Tesis<sup>4</sup>:

**PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.** De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97.- Partido Acción Nacional.-5 de septiembre de 1997.-Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-460/2000.-Partido Acción Nacional.-29 de diciembre de 2000.-Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001.-Partido de Baja California.- 26 de febrero de 2001.-Unanimidad de votos.

---

<sup>4</sup> Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, Tesis S3ELJ 21/2001.

La aprobación del Decreto impugnado ha violentado los tres principios antes referidos, porque la actuación del órgano revisor de la Constitución de Tabasco violenta el cumplimiento de las previsiones normativas de la Constitución General, constituye la adopción de determinaciones carentes de sustento normativo y se pretende fundar en facultades que el orden jurídico no le otorga.

En apoyo a lo anterior, sirva de sustento la Tesis P.J. 144/2005 de rubro **"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO"**. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que **en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.** Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros

Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

**TERCERO. Violación al principio de representación proporcional contenido en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

El artículo 116, fracción II de la Constitución Federal establece que el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, destacando que, **el número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno.**

Por su parte, el artículo 115 de la Ley Fundamental dispone que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano y **representativo**, entre otras.

En el caso concreto, debido a la disminución del número de diputados por el principio de representación proporcional, los partidos políticos contendientes en una elección no contarán con un grado de representatividad acorde a su presencia en los municipios que integren a la entidad federativa.

Sirve de sustento a lo anterior lo establecido en la jurisprudencia P./J. 19/2013 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro ***“REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS”***, de donde se desprende que, el principio de representación proporcional previsto para la conformación de los órganos legislativos, se instituyó para

dar participación a los partidos políticos con cierta representatividad en la integración de dichos órganos, para que cada uno de ellos tenga una representación proporcional al porcentaje de su votación total y evitar la sobrerrepresentación de los partidos dominantes, lo que implica que los institutos políticos tengan cierto grado de representatividad a nivel estatal, puesto que en su caso, conformarán precisamente un órgano de Gobierno Estatal.

Esto es, que los partidos políticos que cuenten con cierto grado de representatividad estatal puedan acceder a los cargos de representación proporcional, sin que ello signifique que se limite la representación integral y genérica de los intereses de una concreta colectividad.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la tesis de jurisprudencia P.J. 74/2003, que el porcentaje que debe corresponder a cada uno de los principios de mayoría relativa y representación proporcional no debe alejarse significativamente de las bases generales establecidas en la Constitución Federal.

Esta tesis adquiere relevancia para el caso concreto, porque es evidente la desproporción que existe en la integración del Congreso del Estado, considerando que setenta y dos por ciento de diputaciones son electas por el principio de mayoría relativa y solo veintiocho por ciento asignadas por el principio de representación proporcional, alejándose de las bases generales establecidas en la Constitución General.

Así entonces, la existencia de esta desproporción genera un desequilibrio entre la correspondencia de los límites de sobre y subrepresentación, debido a que desnaturaliza y hace inoperante la efectividad de ese principio vulnerando los derechos de las minorías, en este sentido si bien se ha reconocido la libre configuración legislativa para efecto de regular tal principio, lo cierto es que ello no implica que con esa regulación se dejen de observar las bases y fines de la representación proporcional o se vulneren derechos fundamentales.

En consecuencia, esta Suprema Corte deberá determinar que la disminución de los integrantes del Congreso, en específico, los diputados de representación proporcional, vulnera el principio referido en su vertiente de acceso al ejercicio del poder público mediante la postulación de candidaturas.

Derivado de lo anterior, es preciso destacar que ocho diputados son insuficientes para cumplir con la finalidad de dicho principio, que, como ya se ha expresado, se sitúa como instrumento que permite que los órganos representativos cuenten con participación de la mayor cantidad de sectores posibles, siguiendo un espíritu incluyente. Este argumento resulta relevante, ya que rescata la naturaleza original del principio, favoreciendo el pluripartidismo como contrapeso al partido mayoritario e, incluso, hegemónico, evitando la existencia de bloques de partidos dominantes.

De hecho, la doctrina moderna ha asociado a la representación proporcional, con la protección constitucional de las minorías parlamentarias.

Por lo anterior, se deberá estimar que no basta con que la legislatura local contemple el principio de representación proporcional para que se cumpla con el mandato constitucional establecido en la fracción II del artículo 116 de la Ley Fundamental, sino que es necesario que se realice una valoración de la operatividad o funcionalidad de dicho principio.

#### **CUARTO. Vulneración al principio del sufragio universal.**

El sistema político mexicano descansa bajo el principio del sufragio universal y la voluntad ciudadana que debe expresarse de manera individual, por medio del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible.

En México a partir del año 1963, se reformó la Constitución general de la República el cual dio origen al sistema mixto de elección con el cual contamos actualmente, otorgando a los partidos de oposición la oportunidad de obtener escaños a través del principio de representación proporcional.

Es decir, nuestro país cuenta con dos sistemas de elección de representantes: a) el proporcional, en el que se busca la elección de un número de representantes proporcional a los votos recibidos por el partido postulante, dentro del territorio sometido a las funciones del órgano elegido, y b) el mayoritario, en el que se eligen candidatos en cada una de los distritos uninominales en que se divide el territorio, siendo electo el que ha recibido mayor número de votos.

En Tabasco, siguiendo la norma general de la república, en los años ochentas, en el período 1980-1982, se hace efectiva la representación

proporcional y en la quincuagésima legislatura por primera ocasión se otorga cuatro diputaciones de representación proporcional a los partidos de oposición, específicamente al Partido Popular Socialista.

Cabe agregar, que se considera que actualmente, la efectividad del sistema de representación proporcional, es la forma de garantizar la pluralidad en los Congresos del país, a fin de que el voto de todos los ciudadanos se encuentre debidamente representado.

Las disposiciones normativas impugnadas contenidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, específicamente, las reformas al segundo párrafo del artículo 12; los párrafos primero y tercero fracciones 1, 11, 111 y VI del artículo 14; y se derogan el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15; mismas que vulneran las prerrogativa y derechos establecidos en las normas constitucionales y legales 35, 36, 39, 40, 41, 99, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el presente concepto de invalidez se señalará porqué las disposiciones impugnadas al establecer que:

*Artículo 12. ... El Congreso se compone por 29 diputados electos cada tres años, 21 por el principio de mayoría relativa y 8 por el principio de representación proporcional; durante su gestión constituyen una Legislatura. Las elecciones serán directas y se apegarán a lo que disponen esta Constitución y las leyes aplicables.*

El contenido del artículo transcrito anteriormente, violenta lo establecido por los artículos 35 y 36 Constitucionales, de los que se desprenden los derechos políticos electorales de los ciudadanos, que se encuentran asociados de manera directa con el respeto al voto, mismo que se ha convertido en el mecanismo esencial para la elección de las autoridades del Estado y a los representantes populares, los que se encuentran inmersos dentro de las garantías individuales del ser humano.

Contrario a lo señalado, en dicha reforma de la constitución local del Estado de Tabasco, se violenta el principio constitucional de proporción del 60 y 40 por ciento entre los diputados electos por los principios de mayoría relativa y los de representación proporcional, el cual se encontraba vigente en la

Constitución Local del Estado de Tabasco; ya que al señalarse en el artículo 12 que el Poder Legislativo del estado se deposita en un Congreso integrado por la Cámara de Diputados, integrado por 35 diputados electos cada tres años, 21 por el principio de mayoría relativa y 14 por el principio de representación proporcional; se encontraba debidamente armonizada con el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que establece que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales; lo que naturalmente se ve fracturado al pretender que "El Congreso se compone por 29 diputados electos cada tres años, 21 por el principio de mayoría relativa y 8 por el principio de representación proporcional"; toda vez, que la proporcionalidad al establecerse dicha norma será del 72 y 28 por ciento, lo cual de igual manera, provocaría una sobre representación del partido político que obtenga el triunfo en los 21 distritos electorales uninominales.

La sobre representación, provocaría que los trabajos legislativos no sean debidamente discutidos y sancionados en el pleno del congreso local, toda vez, que previamente serán aprobados por el partido con la mayoría absoluta, lo que dejaría en estado de indefensión a la representación minoritaria, es decir un porcentaje de la población no contaría con voz, ni voto en la conformación de leyes o reformas que vulneren sus derechos.

En el mismo sentido, se puede establecer que contrario a lo señalado por la norma constitucional federal, el porcentaje mínimo requerido para que los partidos pudieran acceder a las diputaciones de representación proporcional será mayor al 3%, lo cual provocaría que los institutos políticos que alcancen el umbral federal, se encuentren sin representación en el congreso local, que consecuentemente, evitaría que el voto ciudadano emitido en favor de los mismos, deje de tener el valor de equilibrio en el sistema electoral mixto del estado de Tabasco; que alteraría el equilibrio en la toma de decisiones.

Es decir que, en la nueva conformación del Congreso Local de Tabasco, se provoca la sobrerrepresentación, el cual refiere que, en ningún caso, un partido político contará con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida; en este caso, de darse la reforma

que se combate, provocaría que el partido mayoritario rompa con el equilibrio democrático.

En el mismo orden de ideas, al señalarse en dicha reforma que:

*Artículo 14.- La elección de diputados, propietarios y suplentes, según el principio de representación proporcional, será por lista de candidatos en una circunscripción plurinominal que comprende todo el territorio del Estado.*

Debe tomarse en consideración, que se pretende establecer una subrepresentación poblacional, ya que el Estado de Tabasco se encuentra subdividido en regiones, las cuales agrupan a municipios con características geográficas y poblacionales distintas, las que al conformar una sola circunscripción dejarán de tener la representación correspondiente en el congreso local; de igual manera, provocaría que poblacionalmente dichas regiones no encuentren la representatividad con el diputado de la región que les corresponda, en razón de la conformación de una sola circunscripción; la que en el equilibrio poblacional que otorga el sistema electoral mixto, en este caso, dejaría de existir, provocando que municipios como el Centro, que actualmente tiene un mayor número de pobladores, deje sin representatividad a municipios como los de la región de los ríos que mantienen una densidad poblacional menor.

Contrario a lo que pretende la reforma en comento, la representatividad poblacional que actualmente presenta el estado de Tabasco respecto del número de diputados 35, se encuentra en equilibrio poblacional, es decir, que guarda una proporción entre el número de habitantes y la representación porcentual, caso contrario sería, la reducción de 6 diputados electos por el principio de representación proporcional, provocaría que el congreso local tenga un máximo de 29 diputados, de los cuales 21 serían electos por el principio de mayoría relativa y 8 por el de representación proporcional, un desequilibrio del 72 y 28 por ciento, entre los diputados electos por los principios de mayoría relativa y los de representación proporcional, respectivamente, lo cual es desmedido, hace nugatorio el derecho de las minorías, y consecuentemente, vulnera las acciones afirmativas que recientemente fueron impulsadas por los órganos electorales locales, en favor de las juventudes y los grupos indígenas, dicha reforma provocaría un desequilibrio en la paridad y equidad de género, en virtud de su desproporción, alejándola totalmente del equilibrio porcentual establecido en



la norma constitucional federal en la conformación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Los derechos político-electorales de los ciudadanos constituyen un pilar fundamental, los que se ven totalmente vulnerados con la reforma constitucional que hoy se combate, toda vez que el artículo 39 Constitucional establece que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo; en el caso del Estado de Tabasco, al tratar de disminuirse el número de diputados se arrebató a los ciudadanos su derecho a constituir de manera legítima y razonada a sus autoridades; específicamente a la legislatura local.

La reforma a la Constitución Local, aleja al pueblo tabasqueño de su derecho de elegir a sus autoridades de manera libre, lo restringe a conformar el congreso local bajo premisas distintas a las establecidas en la Constitución General de la República, específicamente a los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 99, 116 y 122; se pretende provocar una subrepresentación, un desequilibrio en la representación poblacional y se pretende restringir a las minorías en sus derechos adquiridos de representación.

**QUINTO. Falta de Motivación de los Actos De Autoridad Legislativa,** La aprobación del Decreto que ahora se combate, es violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no existe una plena motivación que justifique la aprobación del decreto impugnado, pues se limita a señalar que la propuesta es razonable porque

*Aunado a lo anterior, debe tenerse de manifiesto que uno de los factores fundamentales para la consecución de la Cuarta Transformación del país, consiste en garantizar el fortalecimiento de la democracia representativa y desarraigar prácticas seudodemocráticas que la han desnaturalizado; pues el ciudadano que emite su voto -de acuerdo a sus preferencias, intereses o ideologías- a favor de un candidato que mediante la expresión de sus propuestas y su acercamiento obtuvo su aprobación y simpatía, exige ser representado por este, pues se trata de una elección popular en donde debe privilegiarse la voluntad de la ciudadanía, de aquí que la proporción de candidatos electos por mayoría relativa sea predominante en la integración de las legislaturas federal y locales sin que ello implique hacer nugatorio el derecho de las minorías que también se encuentran representadas en proporción a los sufragios obtenidos.*

Asimismo, mediante la disminución propuesta se lograrán ahorros significativos para el erario, en virtud que, conforme al "Tabulador de puesto por elección popular 2021" la dieta neta -salario- de cada diputado es de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, lo que multiplicado por 6 -número de diputados que se pretende reducir -suma un total de 300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.), lo que en un año ascendería a la cantidad de \$3,600,000.00 (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), y para la conclusión del periodo de la legislatura significaría un ahorro aproximado de \$10,800,000 (diez millones ochocientos mil pesos 00/100 m.n.). Lo anterior, en una proyección llana sin tomar en consideración que la erogación del presupuesto que representa cada diputado no solo implica el pago de su dieta, sino además de servicios personales, materiales, suministros, entre otros, que constituyen una gran carga económica necesaria para el desempeño de las funciones que les han sido conferidas por mandato constitucional, legal y normativo.

Así, desde la óptica del análisis económico del derecho, una ley puede ser considerada eficiente, cuando no se limita de forma exclusiva al logro de los objetivos sociales, sino que además, procura en medida de lo posible, que la manera de lograrlos sea la menos gravosa, puesto que dada las limitaciones de los recursos económicos, significa un derroche injusto para la población, ya que implica correr un riesgo innecesario para el desarrollo de programas prioritarios mediante los cuales se pretende mejorar la calidad de vida y propiciar el bienestar de los gobernados, para lo cual en la presente administración se han implementado los principios de austeridad, racionalidad y economía en los diversos ámbitos gubernamentales.

Derivado de lo anteriormente señalado, la motivación del legislador es errónea, escasa y ambigua porque es inverosímil justificar la propuesta en el sentido de que se dé cumplimiento a los principios de austeridad, racionalidad y economía. El legislador no entró al estudio de fondo de dicha circunstancia ni expuso vertientes que permitieran a la ciudadanía conocer que dicha propuesta beneficie la economía estatal, únicamente justificó de manera genérica por lo que el decreto impugnado carece de una motivación reforzada, y en consecuencia la norma impugnada debe declararse inválida.

Aunado a que el decreto que da origen a la norma impugnada no contiene transcripción íntegra de la exposición de motivos del iniciador, lo que deja en estado de incertidumbre a los sujetos de ley.

En materia legislativa todo acto de dicha autoridad debe estar fundando y motivado, de conformidad con la tesis **FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA**.

*Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.*

Por lo que se refiere al requisito de la motivación de leyes, se satisface cuando éstas se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas y que dicha motivación puede desprenderse de la totalidad del procedimiento legislativo y no únicamente de la exposición de motivos, iniciativa o dictámenes, considerando que todos los actos que integran el procedimiento legislativo están plenamente vinculados entre sí y forman una unidad en su conjunto y, en segundo lugar, que se debe atender a una relación social que el legislador considere prudente regular, situación que en el caso particular no se actualiza y que ocasiona incertidumbre a los sujetos obligados de la ley.

**SEXTO. Violación de Proporcionalidad y razonabilidad jurídica,** la aprobación del decreto que ahora se combate, es violatorio de los artículos 52, 54, 56 y 116, fracción II de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque la norma impugnada se aleja significativamente de los fines que persigue el principio de representación proporcional, en el entendido de que, por medio del porcentaje, se hace nugatorio el acceso de las fuerzas minoritarias a ocupar una diputación por dicho principio.

La reducción del porcentaje llevaría a que diversas fuerzas políticas no alcancen el umbral de votación requerido y no acceder a la representación proporcional, lo que transgrede el derecho humano de los ciudadanos a participar en la vida política y democrática del país, a través de sus representantes, violando el objeto del sistema electoral que busca la pluralidad política en la integración de los colegiados legislativos.

El reconocimiento de los derechos fundamentales, el establecimiento de un conjunto de garantías que aseguren su plena eficacia, y la vinculación directa que ejercen sobre todos los poderes públicos, constituyen uno de los pilares del Estado constitucional. Sin embargo, la estructura dinámica y fragmentaria del texto constitucional, el alto grado de generalidad y abstracción que resulta del tenor literal de la mayoría de sus preceptos, hace que la problemática de la interpretación jurídica, común a todas las ramas del derecho, se agudice en este campo. En este orden de ideas, es menester establecer que el principio de proporcionalidad se considera un parámetro de control de constitucionalidad de la actuación de los poderes estatales.

El legislador debió determinar si la citada disposición legal controvertida constituye una restricción justificada o no al derecho humano de ser votado, razón por la cual, es necesario llevar a cabo un test de proporcionalidad.

El citado test de proporcionalidad como método interpretativo para valorar la proporcionalidad de las restricciones legales a los derechos fundamentales, tiene su sustento en el ámbito de libertad del ejercicio de esos derechos, lo cual implica para el Estado, el deber correlativo consistente en tutelarlos y evitar injerencias excesivas de los órganos de autoridad en el ámbito de los derechos del gobernado.

Conforme a este test, para que la restricción sea proporcional debe tener un fin legítimo sustentado constitucionalmente. Así, una vez que se dilucida la existencia de ese objetivo constitucional, se debe ponderar si la restricción es adecuada, necesaria e idónea para lograrlo.

En caso de no cumplir esos requisitos, la restricción resultará desproporcionada y, por ende, inconstitucional y contraria a lo establecido en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos.

En este sentido, en el supuesto de que no se advierta la existencia de un fin legítimo reconocido constitucionalmente, o en caso de que la restricción en el ejercicio de un derecho fundamental no sea proporcional, razonable e idónea, no se debe aplicar y es necesario optar por aquella que sea conforme a las reglas y principios constitucionales para la solución de la controversia.

El principio de proporcionalidad comprende los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto; a) La idoneidad está vinculada con lo adecuado de la naturaleza de la medida impuesta por la norma para conseguir el fin pretendido; b) El criterio de necesidad o de intervención mínima tiene relación con el hecho de que la medida debe ser eficaz y estar limitada a lo objetivamente necesario; c) La proporcionalidad, en sentido estricto, consiste en la verificación de que la norma que otorga el trato diferenciado tiene relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que las limitaciones causadas por el trato diferenciado no sean desproporcionadas con respecto a los objetivos pretendidos.

El derecho de los ciudadanos para ser postulados como candidatos de los partidos políticos, constituye una modalidad del derecho a ser votado establecido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el decreto aprobado no garantiza la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos que participan en un procedimiento electoral, en tanto que limita la participación de aquellos que lo hacen por conducto de los partidos políticos.

En consecuencia, la reducción de los diputados que integran el Congreso local viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, ya que dicha determinación no puede quedar al libre albedrío del legislador local, sino que el aumento o reducción debe ser proporcional y justificado. Por tanto, el Congreso local se alejó significativamente de los parámetros señalados en la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien este precepto sólo señala un mínimo y no un máximo, esta omisión no genera que quede al libre albedrío y decisión del legislador local. Así que, considerando que el número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete

diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

#### **DETERMINACIONES DE EFECTOS DE LA SENTENCIA. CORRECCIÓN DE ERRORES Y SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ.**

De ser necesario y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita que en su caso, se corrijan los posibles errores que se adviertan en la cita de los preceptos invocados y se supla la deficiencia de los conceptos de invalidez, pues el fin que se persigue al promover la presente acción, es proteger el orden jurídico constitucional y su supremacía en el Sistema Jurídico Mexicano, en atención a la Jurisprudencia correspondiente a la Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV, agosto de 2006. Página 1157. Tesis: P./J. 96/2006. Jurisprudencia. Materia (s): Constitucional, inscrita bajo el rubro **“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTO DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS”**.

*Conforme al primer párrafo del artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda, y podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Esto significa que no es posible que la sentencia sólo se ocupe de lo pedido por quien promueve la acción, pues si en las acciones de inconstitucionalidad no existe equilibrio procesal que preservar -por constituir un examen abstracto de la regularidad constitucional de las leyes ordinarias- y la declaratoria de invalidez puede fundarse en la violación de cualquier precepto de la Norma Fundamental, haya o no sido invocado en el escrito inicial, hecha excepción de la materia electoral, por mayoría de razón ha de entenderse que aun ante la ausencia de exposición respecto de alguna infracción constitucional, este Alto Tribunal está en aptitud*

*legal de ponerla al descubierto y desarrollarla, ya que no hay mayor suplencia que la que se otorga aun ante la carencia absoluta de argumentos, que es justamente el sistema que establece el primer párrafo del artículo 71 citado, porque con este proceder solamente se salvaguardará el orden constitucional que pretende restaurar a través de esta vía, no únicamente cuando haya sido deficiente lo planteado en la demanda sino también en el supuesto en que este Tribunal Pleno encuentre que por un distinto motivo, ni siquiera previsto por quien instó la acción, la norma legal enjuiciada es violatoria de alguna disposición de la Constitución Federal. Cabe aclarar que la circunstancia de que se reconozca la validez de una disposición jurídica analizada a través de la acción de inconstitucionalidad, tampoco implica que por la facultad de este Alto Tribunal de suplir cualquier deficiencia de la demanda, la norma en cuestión ya adquiera un rango de inmunidad, toda vez que ese reconocimiento del apego de una ley a la Constitución Federal no implica la inatacabilidad de aquélla, sino únicamente que este Alto Tribunal, de momento, no encontró razones suficientes para demostrar su inconstitucionalidad.*

Es por ello que solicito a esa H. Suprema Corte se declare la inconstitucionalidad del Decreto impugnado y se restablezca la vigencia y aplicación de la norma prevista antes de la publicación del propio Decreto.

#### **XI. SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE ERRORES FÁCTICOS Y DE SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ.**

En términos de lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley Reglamentaria, atentamente solicito a esa H. Suprema Corte que se sirva corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y que supla los conceptos de invalidez planteados por este promovente, privilegiándose en todo momento la función de ese Máximo Tribunal de la Nación como protector y garante de la Constitución General a través de los medios y procedimientos del control a su cargo para el imperio de la supremacía de la Constitución General en la actuación de las autoridades de todo orden de nuestro país.

#### **XII. OFRECIMIENTO DE DOCUMENTOS Y PRUEBAS.**

A efecto de acreditar todos y cada uno de los conceptos de invalidez que se están haciendo valer en la presente demanda de Acción de Inconstitucionalidad, ofrecemos desde ahora los siguientes medios de prueba:

1. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en la certificación expedida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección del Secretariado del referido instituto; de veinticuatro de julio de 2020, que me acredita como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
2. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en la certificación expedida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección del Secretariado del referido instituto; de veinticuatro de julio de 2020, por la que se acredita que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra registrado como Partido Político Nacional.
3. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en el instrumento notarial número 32,848 de 19 de septiembre de 2019, pasado ante la fe del licenciado Sergio Rea Field, Titular de la Notaría 241, actuando como asociado y a cargo de la Notaría 187, ambas de la Ciudad de México.
4. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en el Decreto número 300, expedido por la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial Número 220 de 26 de agosto de 2021, por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 12; los párrafos primero y tercero fracciones I, II, III y VI del artículo 14; y se derogan el párrafo segundo del artículo 14; y el párrafo segundo del artículo 15; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Misma que, dado su carácter de documento público, y que se acompaña como Anexo dos, también puede ser verificable en el siguiente link: <https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2415>. Esta prueba se relaciona con todos los conceptos de invalidez de la presente demanda.
5. **INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES.** Consistente en todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro del presente expediente.



6. **PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.** En todo aquello que beneficie los conceptos de invalidez alegados por los promoventes.

7. **SUPERVENIENTES.** Que en este momento carecemos de ellas por existir obstáculos para ofrecerlas o por desconocimiento de su existencia, pero que serán exhibidas como pruebas en el momento en que se tengan a la vista y antes de la Audiencia prevista por los numerales 31 y 32 de la Ley Reglamentaria antes invocada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado:

A esa H. **SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**, respetuosamente solicito:

**PRIMERO.** Tenerme por presentado en tiempo y forma, en los términos del presente escrito y documentales anexas la presente Acción de Inconstitucionalidad y con ella denunciando que el Decreto número 300 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Tabasco. Así como la correspondiente publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial número extraordinario 220, folio 5108, de fecha 26 de agosto de 2021, como Órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Decreto que fue sancionado y promulgado por el Gobernador de la citada entidad federativa y con la firma o refrendo del C. Secretario Gobierno, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

**SEGUNDO.** Se admita la presente demanda a través del Ministro Instructor para agotar el procedimiento de Ley.

**TERCERO.** Se me reconozca la personería con que comparezco, la que acredito con la documental pública que adjunto.

**CUARTO.** Se les reconozca la personalidad a los profesionales del Derecho designados como delegados, que fueron nombrados en el proemio de este escrito, debiendo darles toda la intervención jurídica que corresponda.

**QUINTO.** Sírvasse emplazar a los Órganos Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco con copias de esta demanda, para que dentro del término consignado por los artículos 64 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rindan su informe con justificación, siguiendo luego el trámite correspondiente.

**SEXTO.** Se nos admitan y califiquen de legal todas y cada una de las pruebas documentales, que se ofrecen por estar relacionadas con los antecedentes y conceptos de invalidez que se hacen valer.

**SÉPTIMO.** Con fundamento en lo establecido por la fracción IV del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, sírvanse notificar personalmente al C. Procurador General de la República a fin de que comparezca en el presente procedimiento, para el oportuno ejercicio de sus facultades.

**OCTAVO.** En su oportunidad procesal dictar sentencia favorable a la Constitucionalidad de las leyes, decretando la invalidez de la norma general impugnada, con todas las consecuencias jurídicas inherentes a esa decisión.

**PROTESTO MIS RESPETOS**



**RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS**

015145

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION

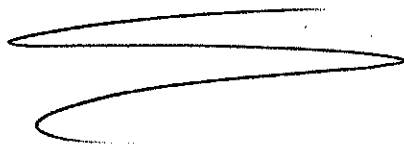
2021 SEP 29 AM 9 28

OFICINA DE CERTIFICACION  
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido vía buzón judicial - en fecha 28/sep/21, -  
en 42 fejas con:

- certificación de Registro en Oficia.
- certificación de Registro en Oficia.
- Instrumento Notarial en 20 fejas - incluidas sus  
pertugas
- Copia Simple de un periódico oficial del Gobierno del  
Estado de Tabasco de 26/agosto/2021 en 15 fejas
- Copia Simple relativa a la sesión pública -  
extraordinaria de la Sexagésimatercera legislatura  
del Congreso del Estado de Tabasco 25/agosto/2021  
en 43 fejas
- Copia simple relativa al Acta 295, en 6 fejas  
formato "Minter" en copia simple en 2 fejas

+ 1 traslado





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los diversos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que de acuerdo con el libro de registro, que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 55, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, mismo que tuve a la vista; la integración de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, es la que se enlista a continuación: -----

NOMBRE	TITULAR DE LA
C. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS	PRESIDENCIA
C. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA	SECRETARÍA GENERAL

Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020). -----

**DIRECTORA DEL SECRETARIADO**

**LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA**

Autorizó: Lic. Claudia Urbina Espanza
Validó: Lic. Claudia Dávalos Padilla
Revisó: Lic. Juan Carlos Vázquez Peña
Elaboró: Okayri Estefanía Ortiz Mercado



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los diversos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que de acuerdo con el libro de registro que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, mismo que tuve a la vista, el Partido Revolucionario Institucional se encuentra registrado como Partido Político Nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la ley de la materia señala. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020). -----

**DIRECTORA DEL SECRETARIADO**

**LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Demanda de

Acción de Inconstitucionalidad

NOMBRE DEL PROMOVENTE: Partido

Revolucionario Institucional

NÚMERO DE COPIAS:

NÚMERO DE ANEXOS:

1 Copia de traslado

FOLIO: 15283

3717eaf3dd0fd83921a99371c675576893238a2a0e768346aff87b621f2d38e8